

AUTO N. 02311

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, las delegadas por la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 y el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 1909 de 2017, modificada por la Resolución 081 de 2018, la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, el 10 de septiembre de 2019, en el marco del operativo de control al tráfico, tenencia y comercialización de fauna silvestre, adelantado en el Centro Comercial Caravana, ubicado en la Calle 12 No. 9 – 68 barrio La Catedral localidad La Candelaria de esta ciudad, local 110, sin razón social, mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 160722, la Policía Metropolitana de Bogotá – Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, en coordinación con funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, practicó diligencia de incautación de unos productos derivados de la fauna silvestre colombiana, consistentes en una (1) cabeza de Tucaneta (*Pteroglossus pluricinctus*), dos (2) cabezas de Tucanes (*Ramphastos sp*), doce (12) collares con extremidades de primates, dos (2) collares con colmillos de Pecari (*Pecari tajacu*), doce (12) collares con dientes de primates, un (1) caparazón de Armadillo (*Dasypus novemcinctus*), una (1) cormaneta de Venado (*Odocoileus sp*), un (1) miembro anterior de Ocelote (*Leopardus pardalis*), un (1) collar con veintinueve (29) bivalvos y una (1) uña de Tapir (*Tapirus terrestris*), al señor **RONALD SNEIDER ROMAN CHASOY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.301.243, por comercializar productos de la fauna silvestre, sin contar con el permiso o autorización de aprovechamiento de fauna silvestre, procedimiento que quedó registrado en acta de atención y control de fauna silvestre No. 1977 de la misma fecha.

Que, por lo anterior, profesionales de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, emitieron **Concepto Técnico No. 10081** del 11 de septiembre de 2019, en el que se narraron los hechos que dieron lugar a la incautación, realizaron una descripción general del operativo de control e indicaron que el señor **RONALD SNEIDER ROMAN CHASOY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.301.243, no contaba con un documento que autorizara su aprovechamiento, expedido por la Autoridad Ambiental Competente, lo que motivó la incautación de unos productos derivados de la fauna silvestre colombiana, consistentes en una (1) cabeza de Tucaneta (*Pteroglossus pluricinctus*), dos (2) cabezas de Tucanes (*Ramphastos sp*), doce (12) collares con extremidades de primates, dos (2) collares con colmillos de Pecari (*Pecari tajacu*), doce (12) collares con dientes de primates, un (1) caparazón de Armadillo (*Dasypus novemcinctus*), una (1) cormaneta de Venado (*Odocoileus sp*), un (1) miembro anterior de Ocelote (*Leopardus pardalis*), un (1) collar con veintinueve (29) bivalvos y una (1) uña de Tapir (*Tapirus terrestris*).

Los productos incautados fueron dejados a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, para su adecuado manejo, mediante el Formato de Custodia FC-OC-19-0369 del 10 de septiembre de 2019, asignando a su vez los rótulos internos OC-AV-19-0890 (*Pteroglossus pluricinctus*), OC-AV-19-0891 y OC-AV-19-0892 (*Ramphastos sp*), OC-MA-19-093 al OC-MA-19-0104 (*Mammalia -primates*), OC-MA-19-0105 y OC-MA-19-0106 (*Pecari tajacu*), OC-MA-19-0107 al OC-MA-19-0118 (*Mammalia primates*), OC-MA-19-0119 (*Dasypus novemcinctus*), OC-MA-19-0120 (*Odocoileus sp*), OC-MA-19-0121 (*Leopardus pardalis*), OC-MA-19-0122 (*Tapirus terrestres*), OC-IN-19-0869 (*Bivalvo*).

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que, en vista de lo anterior, la Dirección de Control Ambiental, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió el **Concepto Técnico No. 10081** del 11 de septiembre de 2019, en virtud del cual se estableció:

“(…) 5. CONCLUSIONES

Conforme a las disposiciones legales, el análisis técnico y los hechos anteriormente descritos puede concluirse que:

1. Los especímenes incautados pertenecen a la fauna silvestre de la diversidad biológica colombiana.
2. Los especímenes eran exhibidos, almacenados y comercializados en un predio de la ciudad de Bogotá, sin ningún tipo de permiso, autorización o licencia de aprovechamiento expedido por la Autoridad Ambiental Competente para realizar esta actividad.
3. Se observan diversas actividades no autorizadas sobre la fauna silvestre (adquisición, movilización, almacenamiento, explotación y comercialización entre otras), las cuales se encuentran descritas en la normativa ambiental, en el Código de Policía y en el Código Penal.
4. Se considera que las acciones cometidas, causan daño a los ecosistemas, daño al recurso fauna silvestre y por lo tanto, daño a nuestros recursos naturales, los cuales son esencialmente importantes para el bienestar del medio ambiente.
5. Se consideran que existieron algunos agravantes en las acciones cometidas por los presuntos contraventores.

6. *Estas especies son comúnmente sometidas a tráfico ilegal de fauna silvestre en el país, actividad que causa un daño grave a nuestros ecosistemas, debido al importante rol que cumplen en la naturaleza dentro de la cadena trófica, lo cual es fundamental para el desarrollo de especies vegetales y de otras especies animales. (...)*”

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

- **De los Fundamentos Constitucionales**

Que, la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8 de la Carta Política, el cual señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, señala:

“ARTÍCULO 29. *El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

Que, el artículo 58 de la Carta Política, establece que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Que, así mismo el artículo 79 de la Carta, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines.

Que, esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir la

compensación de los daños que a aquellos se produzcan, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.

- **Del Procedimiento - Ley 1333 de 2009**

Que, el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que, el artículo 1 de la citada Ley, establece:

“ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. *El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales - UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.* (Subrayas y negrillas insertadas).

Que, el artículo 3 de la precitada Ley, señala:

“ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS RECTORES. *Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993”.*

Que, a su vez, el artículo 5 de la misma Ley, determina:

“ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. *Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*

PARÁGRAFO 1. *En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.*

PARÁGRAFO 2. *El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.* (Subrayas fuera del texto original).

Que, así mismo el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas fuera del texto original).

Que, de igual manera, la multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”.

Que, en consonancia con lo anterior, y en los términos contenidos en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, podrán intervenir personas naturales o jurídicas en el desarrollo de las presentes acciones administrativas.

Que, de otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Visto así el marco normativo que desarrolla el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

- **Inicio de Proceso Sancionatorio Ambiental**

Que, en lo referido al **Concepto Técnico No. 10081** de fecha 11 de septiembre de 2019, elaborado por profesionales de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, se tendrá como tal la fecha de incautación de los especímenes señalados en la respectiva acta.

Que conforme lo anterior y de acuerdo con lo indicado en el **Concepto Técnico No. 10081** del 11 de septiembre de 2019, este Despacho advierte presuntas transgresiones al ordenamiento jurídico conforme a lo señalado por la normatividad ambiental, así:

➤ **RECURSO FAUNA**

Que el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en su Capítulo 2 Fauna Silvestre, compila en toda su integridad el Decreto 1608 de 1978, y al referirse al aprovechamiento de fauna silvestre, establece de manera enfática lo siguiente:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2. MODOS DE APROVECHAMIENTO. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo (...)"

Así mismo, el artículo 2.2.1.2.6.16 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", dispone:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.6.16. Prohibiciones. De conformidad con lo dispuesto por la letra g del artículo 265 del Decreto-ley 2811 de 1974, está prohibido adquirir, con fines comerciales productos de la caza cuya procedencia legal no esté comprobada.

Quienes obtengan individuos o productos de la fauna silvestre para su comercialización, procesamiento o transformación, incluida la taxidermia comercial y la que se realiza por encargo, están obligados a exigir de los proveedores o de los propietarios del material el salvoconducto que acredite su procedencia legal so pena de decomiso, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. (...)" (Subrayado fuera de texto)

Con base en lo anterior, esta Secretaría, se encuentra en la obligación legal de iniciar procedimiento sancionatorio ambiental, a la luz de lo establecido en la Ley 1333 de 2009, en contra del señor **RONALD SNEIDER ROMAN CHASOY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.301.243, por la comercialización, de productos derivados de la fauna silvestre colombiana, consistentes en una (1) cabeza de Tucaneta (*Pteroglossus pluricinctus*), dos (2) cabezas de Tucanes (*Ramphastos sp*), doce (12) collares con extremidades de primates, dos (2) collares con colmillos de Pecari (*Pecari tajacu*), doce (12) collares con dientes de primates, un (1) caparazón de Armadillo (*Dasypus novemcinctus*), una (1) cormaneta de Venado (*Odocoileus sp*), un (1) miembro anterior de Ocelote (*Leopardus pardalis*), un (1) collar con veintinueve (29) bivalvos y una (1) uña de Tapir (*Tapirus terrestris*), sin contar con el permiso o autorización de aprovechamiento de fauna silvestre, vulnerando presuntamente conductas como las previstas en los artículos 2.2.1.2.4.2 y 2.2.1.2.6.16 del Decreto 1076 de 2015.

Que, con el inicio del presente proceso sancionatorio de carácter ambiental, y en los términos contenidos en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, podrán intervenir personas naturales o jurídicas en el desarrollo de las presentes actuaciones administrativas.

No sobra manifestar que esta Autoridad Ambiental adelantará la presente investigación bajo el marco del debido proceso, en observancia de los derechos a la defensa y contradicción y salvaguardando en todas sus etapas los principios de congruencia e imparcialidad.

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que en relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que en virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

Que mediante el artículo 1 numeral 1 de la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto del 2018, el Secretario Distrital de Ambiente, delegó en cabeza de la Dirección de Control Ambiental de la entidad, la función de expedir los actos administrativos de impulso relacionados con los procesos sancionatorios.

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental en contra del señor **RONALD SNEIDER ROMAN CHASOY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.301.243, por la comercialización, de productos derivados de la fauna silvestre colombiana, consistentes en una (1) cabeza de Tucaneta (*Pteroglossus pluricinctus*), dos (2) cabezas de Tucanes (*Ramphastos sp*), doce (12) collares con extremidades de primates, dos (2) collares con colmillos de Pecari (*Pecari tajacu*), doce (12) collares con dientes de primates, un (1) caparazón de Armadillo (*Dasypus novemcinctus*), una (1) cormaneta de Venado (*Odocoileus sp*), un (1) miembro anterior de Ocelote (*Leopardus pardalis*), un (1) collar con veintinueve (29) bivalvos y una (1) uña de Tapir

(*Tapirus terrestris*), sin contar con el permiso o autorización de aprovechamiento de fauna silvestre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor **RONALD SNEIDER ROMAN CHASOY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.301.243, en la Carrera 43 A No. 59 B – 39 Sur barrio Candelaria La Nueva localidad Ciudad Bolívar de esta ciudad, de conformidad con lo previsto por los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: El expediente **SDA-08-2019- 2331**, estará a disposición de los interesados en la oficina de expedientes de esta Secretaría, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que conozcan la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Memorando 005 del 14 de marzo de 2013, emitido por la Procuraduría General de la Nación.

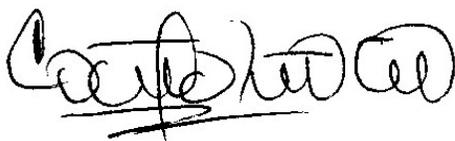
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Entidad, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Fecha

SDA-08-2019-2331

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camilo Alexander Rincon Escobar". The signature is written in a cursive style with some loops and a horizontal line underneath.

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

DIANA PAOLA CUARTAS JIMÉNEZ	C.C: 1015401339	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20191355 DE 2019	FECHA EJECUCION:	21/01/2020
Revisó:					
CLAUDIA YAMILE SUAREZ POBLADOR	C.C: 63395806	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	18/06/2020
DIANA PAOLA CASTRO CIFUENTES	C.C: 1026259610	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20200537 DE 2020	FECHA EJECUCION:	11/06/2020
JULIETH CAROLINA PEDROZA CASTRO	C.C: 33369460	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	05/06/2020
CLAUDIA YAMILE SUAREZ POBLADOR	C.C: 63395806	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/06/2020
JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN	C.C: 79724443	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-0781 DE 2020	FECHA EJECUCION:	18/06/2020
DIANA PAOLA CASTRO CIFUENTES	C.C: 1026259610	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20200537 DE 2020	FECHA EJECUCION:	05/06/2020
JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN	C.C: 79724443	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-0781 DE 2020	FECHA EJECUCION:	26/06/2020
Aprobó:					
Firmó:					
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C: 80016725	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	26/06/2020